Administrativo Común, en el expediente sancionador DVRE-43/08 que se tramita en esta Dirección General de Vivienda y Arquitectura, no se ha podido notificar al interesado doña Vanessa Herero Gutiérrez en el domicilio señalado al efecto en la calle José M^a Cossio número 31, 10^oB de Santander.

Es por lo que, a través del presente anuncio, se la cita para que comparezca en las oficinas de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, sitas en la calle Vargas número 53 8^a planta de Santander en el plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOC, en horario de nueve a catorce horas. Si no atiende este requerimiento, la notificación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para comparecer.

Acto a notificar:

- Resolución recaída en el expediente sancionador número DVRE 43/08.

Santander, 6 de marzo de 2009.—El director general de Vivienda y Arquitectura, Francisco Javier Gómez Blanco.
09/3860

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, VIVIENDA Y URBANISMO

Dirección General de Vivienda y Arquitectura

Notificación de propuesta de resolución de expediente sancionador número DVRE 55/08.

En relación con el expediente sancionador DVRE 55/08 que se tramita en esta Dirección General de Vivienda y Arquitectura y no habiendo podido notificarse a la interesada doña Cristina Pérez Alcedo en el domicilio señalado al efecto en la calle Avenida de la Libertad número 32, Atico B de Castro Urdiales, se ha dictado la siguiente propuesta de resolución:

“Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador incoado contra doña Cristina Pérez Alcedo, la instructora emite la siguiente propuesta de resolución.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El procedimiento correspondiente al expediente sancionador DVRE-55/08 contra doña Cristina Pérez Alcedo fue incoado con fecha de 17 de octubre de 2008, al haberse detectado la posible comisión de una infracción administrativa al régimen legal en materia de viviendas de protección oficial, consistente en no dedicar la vivienda sita en la Avenida Libertad número 32, Atico B de Castro Urdiales, a domicilio habitual y permanente. Dicha vivienda de protección pública en régimen especial, fue promovida por la empresa pública de «Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria S.L.», habiendo obtenido cédula de calificación definitiva por resolución de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, de fecha 2 de noviembre de 2006 (expediente 39.2E.2002.0089.0019).

Segundo.- Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación realizados con fechas 24 y 28 de octubre del 2008, a doña Cristina Pérez Alcedo, según consta en el expediente, se expone en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Castro Urdiales del 20 de noviembre al 1 de diciembre del 2008, citación para la notificación de la apertura del expediente sancionador y su correspondiente pliego de cargos en el que se expresaban los motivos y causas que conducían a la apreciación de las infracciones mencionadas, la normativa que se consideraba infringida y el importe de las sanciones correspondientes, a la vez que se indicaba el plazo conferido por la Ley para formular alegaciones. Asimismo, dicha citación es publicada con fecha 28 de noviembre de 2008 en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC número 231).

Tercero.- Dentro del plazo de quince días hábiles otorgado al respecto, no se produce ningún tipo de comunicación por parte de doña Cristina Pérez Alcedo.

Cuarto.- A continuación, siguiendo las exigencias del Real Decreto 1.398/1993, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se examinan los presuntos hechos constitutivos de infracción administrativa, y se valoran las pruebas obrantes en el expediente; resultando los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Tal y como señala la STS (Sala 3^a, Secc. 4^a) de 29/1/94, recogiendo una línea jurisprudencial consolidada, "tanto el T.C. (STC de 8 de junio de 1981 y 3 de octubre de 1983, entre otras) como el T.S. (SSTS de 26 de abril y 17 julio de 1982) han perfilado una doctrina en materia de derecho sancionador, de la que merece destacarse como líneas maestras las siguientes:

“1^o Ciertamente el artículo 25 de la Constitución admite la existencia de una potestad sancionadora de la administración, aunque sometida a las cautelas que garanticen los derechos de los ciudadanos, que son verdaderos derechos subjetivos, y se condensan en último extremo en no sufrir sanciones sino en los casos legalmente prevenidos y de autoridades que legalmente puedan imponerlas.

2^o En materia de derecho administrativo sancionador son de aplicación los principios generales del derecho penal, coincidentes sustancialmente con los principios esenciales reflejados en el artículo 24 de la Constitución en materia de procedimiento, y ha de ser aplicables en la medida necesaria para preservar los valores esenciales que se encuentran en la base del precepto y la seguridad jurídica que garantiza el artículo 9 de la Constitución”.

En este sentido, y en términos de justicia estrictamente formal, puede afirmarse que en la tramitación de este expediente sancionador ha sido respetada la normativa dispuesta en el Decreto 2.114/1968, de 24 de julio; el Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre y Real Decreto 3.148/1978, de 10 de noviembre, que lo desarrolla; el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora así como los artículos 127 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, aplicables con carácter subsidiario.

Segundo.- En función de la exigencia anterior, y respetando el principio de presunción de inocencia consagrado en la Constitución, y recogido expresamente en la materia que nos ocupa en el artículo 137 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; corresponde a la Administración la carga de la prueba que desvirtúe tal presunción.

Tercero.- Con el fin de comprobar si procedía la apertura de expediente sancionador por presunta infracción de las obligaciones que la ley impone a los adjudicatarios de viviendas de protección oficial, se realizaron visitas de inspección a la vivienda los siguientes días: sábado 26 de abril de 2008 a las 13:00 horas, lunes 5 de mayo de 2008 a las 19:00 horas, miércoles 7 de mayo de 2008 a las 20:00 horas, jueves 22 de mayo de 2008 a las 18:30 horas, y lunes 9 de junio de 2008 a las 21:00 horas, no encontrando a nadie en la misma en ninguna de las visitas realizadas. Asimismo, en el Informe de inspección se hace constar lo siguiente: “Nos comentan los vecinos que la vivienda no está ocupada por la titular. Comentan los vecinos que la vivienda no es utilizada como residencia habitual y permanente”.

Asimismo, como paso previo a la apertura del expediente sancionador, se requirió a la interesada con objeto de que presentase documentación acreditativa de haber estado ocupando su vivienda y de destinarla a domicilio habitual y permanente, resultando la notificación hecha

por el funcionario de Correos fallida los días 4 y 7 de julio de 2008 a las 13:35 y 11:25 horas respectivamente; y siendo finalmente devuelta a esta Dirección tras expirar el plazo sin haber sido recogida en Correos.

Cuarto.- Con fecha 7 de agosto de 2008, a las 12:00 horas, el Arquitecto Técnico Inspector de Obras y Viviendas del Servicio de Arquitectura y Vivienda de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo se personó en la vivienda de protección oficial informando no encontrarse "ocupada dicha vivienda". En virtud del artículo 137 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ha de reconocerse el valor probatorio de los hechos constatados por los inspectores, sin perjuicio de las pruebas en contrario que pueda aportar el interesado.

Quinto.- Realizada consulta a la AEAT con fecha 17 de junio de 2008, acerca del domicilio fiscal de la interesada, se nos indica que dicho domicilio fiscal no se corresponde con el de la Vivienda de protección oficial, situándose el mismo en la calle Arturo Duo Vital número 9, 5º-C de Castro Urdiales. Atendiendo a la definición de domicilio fiscal de la Ley del IRPF, este se corresponderá con el lugar donde la persona reside por un periodo de más de 183 días al año. De ello se deduce que, o bien la interesada pasa más de 183 días al año en otra vivienda, con lo cual la vivienda de protección oficial no constituiría su domicilio habitual; o bien ha incumplido la obligación de comunicar el cambio de domicilio fiscal que impone la Ley General Tributaria.

Sexto.- Por otro lado, realizada consulta, con fecha 26 de junio de 2008, al Índice General de Titularidades del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, se nos informa que la interesada figura como titular de un inmueble en la localidad de Castro Urdiales.

Séptimo.- A lo anterior, cabe añadir los resultados del Grupo Inforexpres, que tras diversas indagaciones concluye en su Informe lo siguiente: "la señora Pérez Alcedo, según su vecina de puerta de la calle Arturo Duo Vital, 9 5º-C, donde residía habitualmente, ha fijado su residencia en Tenerife debido al traslado laboral de su esposo".

Octavo.- De todo lo expuesto anteriormente, y en cuanto a la determinación de las responsabilidades procedentes, considerando la documentación obrante en el presente expediente sancionador, en especial de los fundamentos de derecho 3º, a 7º, quedan clara y plenamente acreditados los hechos imputados a doña Cristina Pérez Alcedo que ha incumplido la obligación, que como adjudicataria de una vivienda de protección oficial, le impone el artículo 3 del Real Decreto 3.148/1978, de 10 de noviembre, por el que se desarrolla el Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre Política de Vivienda, de destinarla a domicilio habitual y permanente.

Noveno.- La actitud de la interesada resulta absolutamente insolidaria con los posibles futuros adjudicatarios de viviendas de protección oficial, que están en lista de espera más tiempo del necesario por falta de financiación en los distintos proyectos y que realmente necesitan la vivienda, así como con los demás adjudicatarios, que cumplen escrupulosamente sus obligaciones, entre ellas, la de destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente en los plazos establecidos. Ello crea una importante alarma social, cuando se constata que en el sorteo para su reparto se adjudican viviendas a personas que no las necesitan, existiendo muchas, que necesiándola, no pueden acceder a ella.

Décimo.- Las considerables ayudas económicas que se otorgan a los adjudicatarios de las viviendas de protección

oficial, tienen como finalidad que las mismas se destinen a domicilio habitual y permanente y que lo hagan en los plazos legalmente establecidos.

Undécimo.- Nunca el destino de las viviendas de protección oficial es constituir la segunda residencia del adjudicatario o lugar vacacional o de descanso del mismo ni constituir una inversión inmobiliaria de futuro sin fecha cierta para su utilización como domicilio habitual y permanente. Admitir la desocupación de las viviendas de protección oficial por sus adjudicatarios posibilitaría la existencia de viviendas de protección oficial desocupadas o que solamente se utilicen esporádicamente, lo que ocasiona una gran alarma social, constantemente denunciada ante la Administración Pública. Es por ello, que en la imposición de la sanción ha de tenerse en cuenta la naturaleza de los perjuicios causados. En el presente supuesto, al no respetarse las condiciones impuestas por la normativa de viviendas de protección oficial, cuyo fin es facilitar a todos los ciudadanos el acceso a una vivienda, se afecta directamente al derecho del resto de los ciudadanos que no han podido beneficiarse de las ayudas otorgadas por los entes públicos. Cabe por ello aplicar la sanción en su grado superior considerando el grave perjuicio causado al interés general.

Duodécimo.- En cumplimiento del artículo 13.1.d) del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, el órgano competente para la resolución del presente procedimiento será el director general de Vivienda y Arquitectura, según se deduce de lo dispuesto por el artículo 37, párrafo segundo, del Real Decreto 2.960/1976, de 12 de noviembre y del artículo 162 del Decreto 2.114/1968, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley sobre Viviendas de Protección Oficial.

Por todo ello, vistas las disposiciones aplicables contenidas en el Decreto 2.114/1968, de 24 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley sobre Viviendas de Protección Oficial; el Real Decreto 3.148/1978, de 10 de noviembre, por el que se desarrolla el Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre Política de Vivienda; el Real Decreto 2.960/1976, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la legislación de Viviendas de Protección Oficial; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, y demás disposiciones atinentes y de general aplicación,

SE PROPONE:

Imponer a doña Cristina Pérez Alcedo, una multa de 6.010,12 euros por la comisión de una infracción muy grave, prevista en el artículo 56.3 del Real Decreto 3.148/1978, de 10 de noviembre, por el que se desarrolla el Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre la política de vivienda, por incumplimiento de la obligación de dedicar la vivienda de protección oficial que le fue adjudicada por sorteo, sita en la Avenida Libertad número 32, Ático B, de Castro Urdiales, a domicilio habitual y permanente.

De no hacerse efectivo que la vivienda constituye su domicilio habitual y permanente, se impondrán sucesivas multas coercitivas hasta su cumplimiento.

La multa impuesta deberá hacerse efectiva en el plazo de quince días, una vez que la resolución fuera firme, mediante ingreso del documento 046 que acompañará a la resolución en cualquier Banco o Caja de Ahorros, debiendo presentar el justificante de pago en esta Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, cabiendo en caso de incumplimiento proceder por la vía administrativa de apremio. En caso de incumplimiento de lo acordado, y una vez firme la resolución, podrá actuarse de conformidad a lo prevenido

en el artículo 96.1) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Procedimiento Administrativo Común, acudiendo a la vía ejecutiva de apremio.

Esta propuesta de resolución, cuya copia se eleva a la superioridad, se remite al interesado para su conocimiento, indicando que de conformidad con el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, en el plazo

de quince días, a contar desde el siguiente a su notificación, podrá alegar cuanto considere favorable a sus intereses y presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes ante el instructor del procedimiento.”

Santander, 17 de febrero de 2009.–La instructora, Jiména Manjón Rodríguez.

09/3861

SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

Citación para notificación de procedimiento de recaudación en período voluntario

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, habiéndose intentado por dos veces la notificación a través del Servicio de Correos a las personas o sus representantes que más abajo se relacionan y no resultando factible por causas no imputables a esta Gerencia, se les cita a través del presente anuncio para que comparezcan en la oficina de facturación del Hospital «Marqués de Valdecilla», sita en avenida Valdecilla, pabellón 21- planta baja, Santander.

En virtud de lo anterior dispongo que los citados o sus representantes acreditados deberán comparecer en el plazo de diez días contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOC, en horario de nueve a catorce, para notificarles por comparecencia actos administrativos que les afectan, cuyas referencias constan seguidamente, con la advertencia de que si no atienden este requerimiento la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Acto a notificar: Procedimiento de recaudación en período voluntario precio público asistencia prestada Hospital Valdecilla.

N.I.F.	APELLIDOS Y NOMBRE	Nº DOCUMENTO	R.U.E.	NOTIFICA.	
73573879F	MALONDA MOMPO FRANCISCO JOSE	047 2	001914195	SA3951	2009/677
35322577M	GARCIA CERVIÑO ALBERTO	047 2	001933480	SA3951	2009/678
13790885Q	PEREZ FUERTES JOSE MARIA	047 2	001933566	SA3951	2009/679
72072337C	COBO SANTIAÑEZ MARIO	047 2	001942291	SA3951	2009/680
72074750H	GUTIERREZ HIERRO CRISTOPHER	047 2	001942352	SA3951	2009/681
13780927V	ARRUTI PERNIA FRANCISCO JAVIER	047 2	001946403	SA3951	2009/682
136212379	CABO RUIZ ANTONIO FELIPE	047 2	001946455	SA3951	2009/683
13941705W	ESCUDERO NORIEGA M ANGELES	047 2	001946473	SA3951	2009/684
72073605T	CERREDEUELA BARRUL FAUSTINO	047 2	001967220	SA3951	2009/685
X8150336X	GONZALEZ MARIN EDWIN DANIEL	047 2	001967306	SA3951	2009/686
X6560332L	CHAVEZ MARCELO HERNAN	047 2	001967324	SA3951	2009/687
11292798M	MARTIN BARRER EL VIRA	047 2	001970404	SA3951	2009/688
13674834T	ARREDONDO DIEZ MARIA CONSUELO	047 2	001971621	SA3951	2009/689
X4413949L	CARCAMO NUÑEZ MARCELO CRISTIAN	047 2	001971646	SA3951	2009/690
09798568Q	GARCIA BARRIOS CLAUDIA	047 2	001971734	SA3951	2009/691
10861473E	HEVIA GONZALEZ JOSE CARLOS	047 2	001971743	SA3951	2009/692
13715588K	MAYORAL GOMEZ JOSE MIGUEL	047 2	001971761	SA3951	2009/693
X7670622F	RUBIO SIERRA JAVIER FELIPE	047 2	001971786	SA3951	2009/694
72074849W	RUIZ CAGIGAL JUAN JOSE	047 2	001971795	SA3951	2009/695
13717654V	SAIZ-CALDERON RUIZ JUAN JESÚS CASIMIRO	047 2	001971804	SA3951	2009/696
13748653N	GOMEZ PEÑA MARIA DE LA MERCED	047 2	001979163	SA3951	2009/697
72076665R	SÁNCHEZ HERNÁNDEZ RUBEN	047 2	001979233	SA3951	2009/698
13924365G	AHEDO SAROBE MIGUEL	047 2	001995613	SA3951	2009/699
X7609187M	BUSCA CHRISTOPHE ALAIN	047 2	001995726	SA3951	2009/700
13696690Y	DIEGO BAROJIN JOSE MANUEL	047 2	001995780	SA3951	2009/701
13720602K	GONZALEZ PEREZ ENRIQUE	047 2	001995823	SA3951	2009/702
X9202990T	MARIYANOV ALEKSANDROV ALEKSANDAR	047 2	001995850	SA3951	2009/703
72074814J	PEREZ GARCIA RUFINO	047 2	001995902	SA3951	2009/704
20192031D	RODRIGUEZ DUQUE YOLANDA	047 2	001995936	SA3951	2009/705
13624662Z	SÁNCHEZ AJA MARGARITA	047 2	001995954	SA3951	2009/706
X5465171A	TANDI MERELES GERTRUDIS LORENA	047 2	001995981	SA3951	2009/707
13760482L	TORRALBA MARTINEZ ALFREDO	047 2	001995990	SA3951	2009/708
72065565X	MONTEQUIN TEJADA EDUARDO	047 2	001996015	SA3951	2009/709
13480530T	MORATINOS SAN MIGUEL M CARMEN	047 2	002011591	SA3951	2009/710
13690357K	OLAVARRIA MAZO ANA MARIA	047 2	002011616	SA3951	2009/711
20211724Z	PAVON LASTRA JUAN CARLOS	047 2	002011634	SA3951	2009/712
13746230G	QUINTILLA SANTIAGO ANA ISABEL	047 2	002011652	SA3951	2009/713
20216343X	GONZALEZ MARTIN JAVIER	047 2	002013892	SA3951	2009/714
25745183H	NAVARRO TEBA PILAR	047 2	002014206	SA3951	2009/715
20216180P	SAN EMETERIO PORTILLA MANUEL	047 2	002014215	SA3951	2009/716
17018949F	SÁNCHEZ ANDRES DAVID	047 2	002014230	SA3951	2009/717
13776653K	SALMON RUMOROSO ANTONIO	047 2	002014242	SA3951	2009/718
78896454Z	ALVAREZ GARCIA SILVIA	047 2	002031900	SA3951	2009/719
72179419Z	CARPIO VARGAS DANIEL	047 2	002031961	SA3951	2009/720
20216124K	GOMEZ-ULLATE FUENTE JAVIER	047 2	002032074	SA3951	2009/721
72172607X	GARCIA MANZANARES JOSE	047 2	002047982	SA3951	2009/722
20198660Z	MATO JARA DANIEL	047 2	002048034	SA3951	2009/723
13772882E	MONTES MARTIN FERMIN	047 2	002048043	SA3951	2009/724
25745183H	NAVARRO TEBA PILAR	047 2	002048061	SA3951	2009/725
72052377R	RUIZ GONZALEZ CRISTIAN	047 2	002048210	SA3951	2009/726
72045141X	SOLANA PALACIOS JOSE ANTONIO	047 2	002048314	SA3951	2009/727
X6397917F	PALACIOS REYNA JACQUELINE MARIVEL	047 2	002048393	SA3951	2009/728
72053532Y	CERREDEUELA BARRUL CARLOS	047 2	002071843	SA3951	2009/729
20190219Z	ESTEBANEZ SÁNCHEZ MIGUEL ANGEL	047 2	002072062	SA3951	2009/730
72068926J	DE LA PEÑA GUTIERREZ JAVIER	047 2	002072096	SA3951	2009/731
20189830Q	SÁNCHEZ BARRENA SERGIO	047 2	002072114	SA3951	2009/732
X8427391F	VRANCEANU ROXANA LAVINIA	047 2	002072141	SA3951	2009/733

Santander, 5 de marzo de 2009.–El director gerente del Hospital «Marqués de Valdecilla», José Luis Bilbao León.